

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero veintiuno de mil ochocientos setenta y dos.

Como pide el C. procurador general trascribiéndose su pedimento y en consecuencia devuélvanse las actuaciones respectivas y archívense á su vez el tomo.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafraqua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auzá.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero veinticuatro de mil ochocientos setenta y dos.—*Fernandez.*

AMPARO.

De garantías promovido ante el juzgado de Distrito de Yucatan por varios comerciantes de Mérida, contra el C. tesorero general del Estado que exige el derecho de consumo á la harina que han importado los quejosos al Estado, en los buques "Dos de Mayo" y "Veloz Veracruzano."

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito.

El fiscal dice: que los señores Zapata, Ibarra, Dondé y compañía, Manuel Dondé Cámara, Gregorio Milan, Rafael Trava, E. Avila de Regil y H^o, Ramon Aznar Perez y la sociedad Castellanos y Dominguez todos del comercio de esta capital, solicitan amparo contra los actos del C. tesorero general del Estado que les exige el pago de veinte reales por tercio de harina nacional, conforme á los decretos locales de Julio de 1867, Marzo de 1868 y Febrero de 1871, que aseguran ser contrarios á la fraccion 9^a del art 72 de la Constitucion y su ley reglamentaria de 2 de Mayo de 1868, pretendiendo igual amparo contra el decreto tambien local de 6 de Octubre del año pró-

ximo pasado por violacion de las garantías que otorgan los artículos 17 y 22 de la propia carta fundamental. El infrascrito al examinar estas diligencias, encuentra que por mas esfuerzos que hacen los solicitantes para colocarse en el lugar del C. Eduardo Arana al merecer el amparo contra la imposicion de la harina nacional decretada por el Estado en 19 de Julio de 1867 y 24 de Marzo de 68, no es posible conseguirlo hoy, por la sencilla consideracion de que, cuando al Sr. Arana se le otorgó aquel amparo no estaba gravado el consumo de los efectos del Estado con el derecho que se imponía á la harina; pero en la actualidad, el decreto de 7 de Agosto del año pasado viene igualando la harina nacional con el derecho de consumo que se impone á los efectos del país, presentando ahora el art. de la ley á que se contrae el amparo, un gravámen menor del 25 p^o á que están sujetos los productos del Estado; de manera que ya no se infringe como entonces el decreto general de 2 de Mayo 1868, reconociéndose mas esta verdad si se tiene en cuenta el carácter y condiciones que el citado decreto posterior de 7 de Agosto último establece para los efectos de su consumo, y la competencia del Estado para legislar sobre actos de su administracion interior. El otro punto de amparo se hace consistir en la facultad económica con que la ley de 6 de Octubre de 1871 reviste á los empleados de hacienda para el cobro y ejecucion de sus derechos, pretendiéndose probar con esto, que se viola la garantía constitucional que acuerda el art. 16; pero como bien se advierte este artículo no se refiere á los actos que administra una ley, pues que entonces no se hace fuerza sino que se procede de la manera conveniente á la naturaleza del crédito y para dejar expedita la administracion que de otro modo podria ser envuelta en cuestiones de simple tramitacion y que no deben causar perjuicios.

De lo expuesto resulta:

Primero; que la imposicion de la harina

es menos que la que sufren por el mismo decreto de consumo los efectos del país: y

Segundo; que siendo la autoridad pública la que confiere la facultad económica, no puede decirse que hace fuerza el que la usa en el sentido á que se contrae la garantía constitucional; por cuyos fundamentos el fiscal opina que debe declararse sin lugar el amparo solicitado en los dos puntos marcados por los quejosos en estas diligencias.

Mérida, Enero veinte y seis de mil ochocientos setenta y dos.—*P. Higueros.*

Sentencia del C. juez de Distrito.

Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan.

Mérida, Febrero primero de mil ochocientos setenta y dos.

Visto este juicio de amparo promovido por los comerciantes de esta ciudad CC. Manuel Zapata, Ibarra Dondé y compañía, Manuel Dondé Cámara, Gregorio Milan, Rafael Trava, E. Avila de Regil é hijo, Castellanos y Dominguez, y Ramon Aznar, contra el tesorero general del Estado que los cobra al primero, mil ciento cincuenta pesos, quinientos al segundo, doscientos cincuenta al tercero y cuarto, ciento ochenta y siete pesos cincuenta centavos al quinto, cuatrocientos cincuenta y dos pesos cincuenta centavos al sexto, ciento veinticinco pesos al sétimo y veinticinco pesos al último, como derecho de consumo por la harina nacional, fundado en los decretos locales de 19 de Julio de 1867, 24 de Marzo de 68 y 9 de Febrero de 71 que gravaron este artículo, y que los solicitantes alegan que se viola en sus personas, con este cobro, las garantías que les otorga el art. 27 del código fundamental; visto el segundo punto en que manifiestan que la ley de Octubre último viola la garantía que les otorga el art. 17 privándoles del derecho de nombrar depositario en los casos de seques-

tro, por lo cual creen que se ejerce violencia. Visto el tercero en que exponen, que se viola la garantía otorgada por el art. 22, porque segun dicen, la multa decretada por la referida disposicion de 9 de Octubre es excesiva y equivalente á una confiscacion. Vistos los documentos acumulados á los ocurso de los quejosos; el informe justificativo del C. tesorero general; lo pedido por el C. fiscal; la recusacion hecha al propietario del juzgado; el auto que se dió por recusado, pasando al conocimiento del que provee como el llamado por la ley; la citacion para sentencia y lo alegado por los promoventes al citárseles, con cuanto mas ver convino.

Considerando: que la solicitud de amparo que presentan los quejosos la fundan, en que el tesorero general del Estado les cobra derechos de consumo contrariando la prohibicion que establece el supremo decreto reglamentario de 2 de Mayo de 1868, por exigir un gravamen que no se haya determinado para los frutos de los otros Estados, cuando por los decretos de 14 de Enero y 4 de Agosto de 1871 se vé, que Yucatan ha impuesto á sus propios productos el 25 p^o sobre su aforo por lo que no ha gravado la harina con mayores derechos que los que se permiten por el citado decreto de 2 de Mayo. Que los dos pesos cincuenta centavos que se cobra por tercio 6 barril de harina entran perfectamente en el aforo decretado, puesto que cincuenta centavos pertenecen á la contribucion federal y los dos pesos segun la demostracion hecha en el informe del tesorero, equivalen al 25 p^o que reportan los frutos propios del Estado. Que si el tesorero general ha cumplido con leyes vigentes al cobrarles el impuesto, no ha violado la garantía que la carta fundamental establece y que por lo mismo, en atencion á la justa proporcion que se ha guardado, han debido satisfacer el adendo del 25 p^o que se les exige. Que si bien Yucatan no produce la harina, no es este un motivo suficiente para comprender

el efecto como exceptuado de todo derecho, pues si así fuera, no tendría objeto el referido decreto, puesto que un Estado no tiene necesidad de importar los efectos que en él se producen cuando estos sirven para llenar sus atenciones. Que esta circunstancia no ha podido ocultarse á la penetración del legislador, porque es una verdad clara, que en el cambio de productos se establece con lo superfluo de su Estado y la escasez de otro respecto de la misma mercancía. Que en cuanto al segundo punto á que se contrae la instancia, es improcedente, por no haberse ejecutado actos cuya interpretación pudiera dar ocasión á creer que se ha violado la garantía constitucional consignada en el art. 17 de la Constitución. Que en cuanto al último punto y que se refiere á la multa designada por negarse al pago del impuesto establecido, sobre la harina traída á los mercados para su consumo no pueden considerarse como una confiscación de bienes, ni su exceso es tal que importe la ruina ó destrucción de una fortuna, existiendo además voluntad de sujetarse á esta pena decretada para la eficacia de los procedimientos fiscales, puesto que cada uno de los causantes ha podido pagar con protesta y ocurrir á la autoridad competente en demanda de sus derechos lastimados, desde luego; por los fundamentos de hecho y de derecho que se han expuesto se declara:

Primero: la justicia federal no ampara ni protege á los quejosos en cuanto al derecho de consumo que les cobra por la harina nacional que introdujeron.

Segundo; no hay lugar á amparo en cuanto á los actos que se dicen violan la garantía que establece el art. 17, por no existir los hechos.

Tercero; se declara igualmente que no ha lugar al amparo en cuanto á la multa, por no estar comprendido el caso en el art. 22 de la Constitución federal de 1857.

Cuarto y último; sáquese testimonio de este fallo para su publicación y elévense los

autos á la Suprema Corte de Justicia de la nación para la revisión que establece la ley de 20 de Enero de 1869. Notifíquese. —*Diego Peniche.*—Ante mí.—*José Anacleto Castillo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero veintidos de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Yucatan por los comerciantes Manuel Zapata, Ibarra Dondé y compañía, Manuel Dondé Cámara, Gregorio Milan, Rafael Trava y R. Avila de Regil é hijo contra el tesorero general del Estado que les exige el pago de veinte reales, derecho de consumo inclusa la contribucion federal, por cada tercio ó barril de harina nacional que han importado últimamente al Estado por los buques "Dos de Mayo" y "Veloz Veraacruzano": que además, al exigirles el pago, se nombra por el comisionado por la tesorería del Estado, un depositario de los bienes que embarga y se impone la multa de una mitad del importe del derecho por el que se hace el embargo, con lo cual los quejosos reputan violadas en sus personas las garantías que protegen los artículos 27, 17 y 22 de la Constitución federal, cuyo juicio promovieron también los comerciantes Ramon Aznar Perez y la sociedad Castellanos y Dominguez por los mismos motivos.

Considerando: que el amparo respecto de la cobranza de dos pesos cincuenta centavos por barril ó tercio de harina y contribucion federal se funda en que es contrario á la ley de 2 de Mayo de 1868, por imponerse un gravámen que no se haya impuesto á los frutos de otros Estados: que por los decretos de 14 de Enero y 4 de Agosto de 1871 expedidos por la legislatura de Yucatan, se ha impuesto á los productos del Estado un 25 p^o sobre su afo-

ro, de lo que resulta que no se ha gravado con derechos mayores que los que prescribe la ley de 2 de Mayo de 1867: que los dos pesos cincuenta centavos impuestos sobre cada barril ó tercio de harina, caben en el aforo decretado, puesto que los dos pesos entran en el 25 p^o impuesto á los productos del Estado, y los cincuenta centavos en la contribucion federal: que si la harina no es un producto del Estado de Yucatan, esto no es una causa bastante para comprender tal efecto entre los exceptuados del pago de derechos, pues en tal caso la ley citada no tendria objeto, puesto que un Estado no tiene necesidad de importar los efectos que en él se producen cuando estos bastan para llenar sus necesidades y puesto que el cambio de productos se establece con lo sobrante en un Estado y lo que falta á otro respecto del mismo producto.

Considerando tambien: que el amparo respecto del punto á la violacion del art. 17 de la Constitucion federal es improcedente, por no haberse practicado en el caso algun acto contrario á ese artículo; y

Considerando, por último, el punto relativo á la imposicion de la multa: que no puede considerarse como una confiscacion ni como una multa excesiva, ni como una pena inusitada y trascendental y que el incidir en el pago de esa multa, depende mas bien de la voluntad de los deudores quienes por no pagar el impuesto dan lugar á la imposicion de la multa; resultando de todo lo expuesto que no hay violacion de las garantías respecto de las que los quejosos solicitan amparo, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el 1^o del actual por el juzgado de Distrito de Yucatan, que declara:

Primero; que la justicia federal no ampara ni protege á los quejosos en cuanto al derecho de consumo que se les cobra por la harina nacional que introdujeron.

Segundo; que no hay lugar al amparo en cuanto á los actos que se dice violan la

garantía que protege el artículo 17, por no existir los hechos, y

Tercero; que no ha lugar al amparo en cuanto á la multa por no estar comprendido el caso en el artículo 22 de la Constitucion federal de 1857.

Devuélvase sus actuaciones al juzgado de que proceden con testimonio de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—Firmados.—*S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—J. M. Lafragua.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—Luis Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Leon Guzman.—Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Febrero veintisiete de mil ochocientos setenta y dos.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO

De garantías promovido ante el juzgado 2^o de Distrito de México, por el C. José M. Guardiola, contra el C. gobernador del Distrito federal, que lo condenó á un año de servicio de cárcel.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El promotor dice: que el C. José M. Guardiola ha interpuesto el recurso de amparo por considerar violadas en su persona las garantías individuales que otorga el art. 21 de la Constitucion, con la determinacion del C. gobernador del Distrito que lo destina á un año de servicio de cárcel en esta ciudad. Evacuado el informe respectivo, el C. gobernador acompaña el testimonio de la sentencia del tribunal de vagos que

SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA